

Delegado presidencial resolvió no reanudar desalojo ayer en San Antonio

Megatoma: Ministro Poduje remarca que se privilegiará a quienes “no se han saltado la fila”

MAURICIO SILVA

Desde que el lanzamiento parcial de la megatoma de San Antonio partiera el 12 de enero, el 60% de las 105 hectáreas que seguirán siendo propiedad privada ya ha sido desocupado y devuelto a su dueño. El proceso fue suspendido con motivo de la destinación de las fuerzas policiales de la Región de Valparaíso a la seguridad del Festival de Viña del Mar y, conforme a su cronograma, ayer debía ser reanudado. Pero el nuevo delegado presidencial regional, Manuel Millones (ind., ex-UDI), resolvió mantener esta suspensión “para hacer el acompañamiento social a las familias que están siendo desalojadas”.

El representante del Ejecutivo sobrevoló ayer el cerro Centinella junto con la jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, y luego se reunió con diferentes servicios para formar nuevos equipos que acometerán tal tarea, dado que los anteriores estaban compuestos por funcionarios de confianza de las autoridades del gobierno pasado. Otra de las labores definidas fue “concordar los nuevos permisos que van a ser desalojados para el efecto de colaborar con las familias a expulsar en el sentido de que tengan el menor impacto posible en sus enseres y en su reubicación”.

Hasta ahora, según Millones, solo tres familias han hecho uso del albergue que la Municipalidad de San Antonio dispuso por orden de la justicia.

De acuerdo con lo que informó la autoridad, hasta hoy, 756 familias (unas 2.300 personas) han sido desalojadas de la megatoma y la mayoría se ha reinstalado en el paño en expropiación. Sin embargo, este último sector ya no dispone de nuevos espacios, por lo que la labor de acompañamiento estará

Nuevas autoridades regionales mantienen suspendido lanzamiento en preparación de “acompañamiento social” a grupos familiares.



DESALOJO.— Aún quedan por desalojar unas 1.500 personas del sitio a devolver al dueño.

definida en torno a las redes de apoyo de los propios afectados o del albergue, dijo.

La federación de cooperativas en que se organizaron los ocupantes asegura que las familias que han sido expulsadas del predio fueron reubicadas con apoyo de las anteriores autoridades en el predio cuya expropiación decretó el anterior ministro de la Vivienda, Carlos

Montes (PS).

Pero ya en su cargo de nuevo ministro de Vivienda del gobierno del Presidente Kast, el urbanista Iván Poduje (ind.) ratificó lo que había planteado semanas antes en el sentido de que, de estar consolidada la expropiación de las 110 hectáreas que inició su

antecesor, los proyectos que allí se desarrollen priorizarán soluciones habitacionales a quienes “no se han saltado la fila”.

“Si se concretó la expropiación, vale decir, si el fisco ya pagó o está obligado a pagar, vamos a revisar el plan de asignación de tierra y les vamos a dar prioridad a las familias que están antes, por la prelación y no por la violencia”, dijo a este medio el miércoles, el día que asumió.

Ayer en la mañana, reiteró la idea en Radio Cooperativa. “Esto no es una decisión del Ministerio de Vivienda, sino del Presidente de la República”, enfatizó.

Minvu enfrenta caso con restricción presupuestaria

Pese a las advertencias de Poduje, el presidente de la Federación de Cooperativas que conformaron los ocupantes ilegales,

Mario Reyes, se mostró esperanzado en que el nuevo titular del Minvu y de la Delegación Presidencial Regional los reciba para exponerles los ahorros que están realizando los socios de las cooperativas y persuadirlos de que el Plan Habitacional en el terreno en expropiación siga como lo definieron sus antecesores, con ellos como beneficiarios.

“Es complejo, pero creemos que vamos a poder conseguir la misma confianza y seguir avanzando en el proyecto”, expresó Reyes, quien declinó adelantar los argumentos con que intentaría persuadir a una autoridad que se ha mostrado contraria, según ella, a legitimar las tomas.

Ignacio Aravena, experto de la Fundación Pienza, destacó que el Minvu hereda una restricción presupuestaria que acota a mil los subsidios en una región con 300 campamentos.

CARACTERÍSTICA

Un catastro del Minvu arrojó que 13% de los ocupantes tenía otra vivienda y que el 30% eran hogares unipersonales.